

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

DEMANDANTE	Margarita María Latorre Sierra
DEMANDADAS	Colpensiones
RADICADO UNICO NACIONAL	05001-31-05-012-2016-01063 01
TIPO DE PROCESO	Ejecutivo conexo
DECISIÓN	Confirma
ACTA DE DECISIÓN	018 de 2023

Medellín, dos (02) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte ejecutante, frente al auto del 11 de octubre de 2019 que libra mandamiento de pago<sup>1</sup>.

A continuación, se toma la decisión correspondiente, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

<sup>1</sup> Repartido a este Despacho el 15 de diciembre de 2022 conforme al acta de reparto obrante en el expediente digital.

El 4 de marzo de 2016 se presentó demanda ejecutiva solicitándose librar mandamiento de pago por i) \$74.336.073 por diferencia adeudada de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, ii) \$32.269.233 por cotas procesales, iii) intereses moratorios más altos autorizados por la ley sobre dichas sumas, iv) costas y gastos del proceso.

En auto del 11 de octubre de 2019 se libró mandamiento de pago por i) \$74.336.073 por diferencia adeudada de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. ii) \$26.955.430 como capital correspondiente a costas del proceso ordinario. Se negó orden de pago por intereses moratorios sobre los saldos reclamados, porque dicha obligación no se encuentra contenida en el título ejecutivo que promueve la presente Litis.

### **RECURSO DE APELACIÓN**

Inconforme con dicha decisión la parte ejecutante presentó recurso de apelación indicando que, el mandamiento de pago es deficitario porque no se libró por intereses de mora sobre el saldo insoluto de intereses como se pide en la demanda ejecutiva, ni ordena al menos la corrección monetaria sobre dicho valor, que serían las medidas para compensar el daño irrogado por la pérdida del valor adquisitivo de la moneda.

Destaca que, la demanda ejecutiva se presentó el 3 de marzo de 2016, y solo hasta el 11 de octubre de 2019, se profiere mandamiento de pago, respecto del saldo insoluto correspondiente al menor valor por concepto de intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pues Colpensiones los liquidó a la fecha de la sentencia de segunda instancia, y no hasta la fecha de pago de las condenas como fue ordenado.

Aclara que lo pretendido no es que se apliquen intereses de mora y al mismo tiempo, indexación, por un mismo lapso, si no que se distinga que la suma de \$74.336.073 se causó a título de intereses de mora, hasta la fecha de interposición de la demanda ejecutiva, pero que a partir de dicha fecha, debe ordenarse la indexación de los dineros

a pagar, pues de lo contrario se está violentando el principio de reparación integral del daño, y se está enriqueciendo sin justa causa el patrimonio de Colpensiones, con el valor de la corrección monetaria, que por tal defecto, le correspondería asumir al ejecutante, sin que exista justificación para ello.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

El ejecutante presentó alegatos reiterando lo argumento en su alzada.

De otra parte, indica que, las costas del proceso ordinario equivalen a \$31'269.233 discriminada así: \$26'955.430 de la primera instancia y \$ 4'313.803 de la segunda, valores que fueron objeto de solicitud en la demanda ejecutiva. No obstante, el despacho al momento de relacionar las sumas adeudadas por conceptos de las costas solo relacionó el valor de las de primera instancia, por lo que se deberá efectuar la corrección del valor total que se adeuda por este concepto.

### **PROBLEMA JURÍDICO**

Consiste en determinar, si en el presente caso obra título ejecutivo que contenga una obligación clara, expresa y exigible, que permita librar mandamiento de pago en la forma solicitada por el recurrente.

### **CONSIDERACIONES**

El análisis versará sobre lo que fue objeto de recurso conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 que alude al principio de la consonancia, en virtud del cual la actividad de la segunda instancia se restringe a los puntos concretos de

inconformidad, razón por la cual no se pronunciará la Sala frente a la inconformidad del valor de las costas por las cuales se libró mandamiento de pago, en tanto ello no fue recurrido.

Acorde con el inciso primero del artículo 100 del CPT y de la S.S. “Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme”.

Ahora, conforme al artículo 422 del CGP<sup>2</sup>, aplicable por analogía al procedimiento laboral en virtud del artículo 145 del CPT y de la S.A., el acreedor puede demandar por la vía ejecutiva las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que procedan del deudor o de su causante, y sean plena prueba contra este. Dichos documentos se clasifican como títulos ejecutivos, los cuales debe probar la existencia de una prestación en beneficio de un sujeto. Esto es, el deudor está obligado frente a su acreedor a ejecutar una conducta de dar, hacer o de no hacer de manera clara, expresa y actualmente exigible.

Los títulos ejecutivos deben poseer condiciones formales y sustanciales, conforme a lo indicado por la jurisprudencia constitucional<sup>3</sup>:

“Las primeras exigen que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación **“(i) sean auténticos y (ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme**”<sup>4,5</sup>

---

<sup>2</sup> ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.

<sup>3</sup> Sentencia T-747 del 2013

<sup>4</sup> CONSEJO DE ESTADO, Sentencia No. 85001-23-31-000-2005-00291-01(31825), del 24 de Enero de 2007, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio.

<sup>5</sup> Sentencia T-283 de 2013. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Desde esta perspectiva, el título ejecutivo puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, o complejo, cuando la obligación está contenida en varios documentos.

De cara a las condiciones sustanciales que debe reunir el título ejecutivo, indicó la Corte Constitucional en la citada sentencia, que es clara la obligación cuando están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan; es expresa cuando la obligación es nítida y manifiesta en la redacción del documento; y es exigible si su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición.

Así mismo, frente a los requisitos impuestos a los títulos ejecutivos consignados en el artículo 422 del CGP, en la sentencia STC3298-2019, Radicación n.º 25000-22-13-000-2019-00018-01 del 14 de marzo de 2019, indicó la Sala de Casación Civil de la CSJ lo siguiente:

“La claridad de la obligación, consiste en que el documento que la contenga sea inteligible, inequívoco y sin confusión en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro con relación al crédito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los elementos de la obligación, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico. Tanto el préstamo a favor del sujeto activo, así como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo.

La expresividad, como característica adicional, significa que la obligación debe ser explícita, no implícita ni presunta, salvo en la confesión presunta de las preguntas asertivas. No se trata de que no haya necesidad de realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la obligación, por cuanto lo meramente indicativo o implícito o tácito al repugnar con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente. Tampoco de suposiciones o de formulación de teorías o hipótesis para hallar el título. Y es exigible en cuanto la obligación es pura y simple o de plazo vencido o de condición cumplida.”.

De lo anterior se colige que, mediante el proceso ejecutivo solo se puede pretender el pago de obligaciones que estén expresa y claramente contenidas en el título que se pretende hacer valer, sin que haya lugar a interpretaciones o elucubraciones al respecto.

## CASO CONCRETO

Lo pretendido por el recurrente es que se libre mandamiento de pago por los intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 o por la indexación.

En lo que interesa al recurso, se advierte que en sentencia de primera y segunda instancia se condenó a un retroactivo pensional e intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre dicho retroactivo. Sin que se advierta que exista condena por los conceptos solicitados por el recurrente.

Frente a la sentencia y sus competentes, en el Modulo “ESTRUCTURA DE LA SENTENCIA JUDICIAL” de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, queda claro que la sentencia está compuesta normalmente por cuatro partes bien diferenciadas y sucesivas, estas son:

1. Identificativa
2. Descriptiva
3. Considerativa
4. Decisiva.

La etapa decisiva:

“es la destinada a resolver de manera concluyente el asunto sometido a consideración del Juzgador; es la que deine (sic) en concreto sobre las pretensiones y excepciones”<sup>6</sup>.

En este caso, la parte decisiva de las sentencias de primera y segunda instancia, no resolvió sobre las cuestiones planteadas por el recurrente, y si bien se indica en la alzada que, sobre el saldo insoluto de \$74.336.073, se debe seguir causando alguna medida de corrección económica, pues de lo contrario, se está violentando el principio de reparación integral del daño, y se está enriqueciendo sin justa causa el patrimonio

---

<sup>6</sup> Modulo Estructura de La Sentencia Judicial de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 2017, p. 252

de Colpensiones, es de resaltar que los artículos 305 y 306 del CGP, aluden a la ejecución de las providencias judiciales, el 306 es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 306. EJECUCIÓN. Cuando la sentencia **condene** al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. **Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutive de la sentencia** y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior. (...)” Resaltos de la Sala.

Así las cosas, si “Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutive de la sentencia”, en el sub judice no es dable librar mandamiento de pago por los conceptos pretendidos, en tanto no fueron objeto de condena. Así se infiere también de lo establecido por la jurisprudencia de la H. CSJ<sup>7</sup> al indicar:

“(...) **En ese orden, no podía el Juzgado librar mandamiento de pago por condenas inexistentes en el título**, pues claramente dispone el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil que solo pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en documentos provenientes del deudor o su causante, o emanen de una sentencia de condena en firme, proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción; esos requisitos en manera alguna pueden emanar de suposiciones (...)”

En tratándose de acciones ejecutivas, no cabe espacio para la duda, la suposición o la extracción conclusiva respecto de las obligaciones a ejecutar, como se ha decantado a lo largo de los años por la jurisprudencia y la doctrina, y claramente lo reguló la norma en comento. (...)” Resaltos de la Sala.

Cualquiera que sea la fuente del título ejecutivo, el documento base de la obligación debe cumplir con los presupuestos legales, en el entendido que el documento contenga una obligación clara, expresa y exigible, de manera que no exista equívoco en cuanto a la prestación debida. Sin que pueda pasarse por alto que, conforme a la doctrina y la jurisprudencia “En términos generales, el proceso ejecutivo deviene de una pretensión de

---

<sup>7</sup> Sentencia con radicación 39416 del 11 de marzo de 2015

satisfacción de una obligación que aparece clara y determinada en el título que se presenta con la demanda”<sup>8</sup>, lo cual no ocurre en el presente caso.

Conforme a las consideraciones anteriores, se **CONFIRMARÁ** la decisión recurrida.

Sin costas en esta instancia a cargo de la parte demandante, pues a pesar de resultar vencida con la formulación del recurso de apelación, ante falta de integración de esta Litis con la parte accionada, no se generó costa alguna lo que incluye las agencias en derecho.

En mérito de lo expuesto, la **Sala primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín**

### **RESUELVE**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la decisión que se revisa en virtud del recurso de apelación, presentado por el apoderado de la parte ejecutante, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

**SEGUNDO:** Sin costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**TERCERO:** Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**. Se ordena incorporar este auto al expediente y regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

---

<sup>8</sup> Devis Echandía, H. Compendio de derecho procesal, Teoría general del proceso. Tomo I. Decimocuarta Edición, Editorial ABC, 1996 pág. 166 citado en la sentencia en SU-041 de 2018



**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA  
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados  
N °017 de febrero 2 de 2023

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>

**Firmado Por:**

**Jaime Alberto Aristizabal Gomez**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**John Jairo Acosta Perez**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**Francisco Arango Torres**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **cc50500abf7270ddfb3a2ad3899e7e0b16a6427e1e1ed25f30d7fe2b75cc976a**

Documento generado en 02/02/2023 03:29:10 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**